

# ARGENTINA



**67ª ASAMBLEA GENERAL**  
*Sexta Comisión (Asuntos Jurídicos)*

*Tema 86. El ámbito y aplicación del principio de la jurisdicción universal  
Intervención de la Delegación argentina*

Nueva York, 17 de octubre de 2013  
Sírvasse verificar durante lectura

---

**67<sup>TH</sup> GENERAL ASSEMBLY**  
*Sixth Committee (Legal Committee)*

*Agenda Item 86. The scope and application of the principle of universal jurisdiction*

*Statement by the Argentine delegation*

New York, 17 October 2013  
Please check against delivery



Misión Permanente de la  
**República Argentina**  
Naciones Unidas

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Señor Presidente,

La Argentina se congratula de que nuevamente la Sexta Comisión se aboque al alcance y aplicación del principio de la jurisdicción universal, incluido en la Agenda de la AGNU por primera vez en su 64ª sesión, debido a que se trata de un instituto de derecho internacional público que debe ser abordado con rigor jurídico.

Mi delegación adhiere a la intervención sobre este tema pronunciada por Cuba en nombre de CELAC.

Mi delegación agradece a la Secretaría la elaboración del Informe contenido en el documento A/68/113 Asimismo, reconoce sus informes anteriores y la elaboración de los documentos informativos A/C.6/66/WG.3/INF.1 e INF.2, que fueran presentados en la 66ª sesión y que contienen la compilación de tratados internacionales y decisiones de tribunales internacionales que puedan ser pertinentes para el principio de la jurisdicción universal, cuya elaboración se encomendara a la Secretaría en virtud del párrafo 4 del Informe de la Sexta Comisión en la 65ª sesión (A/65/474). Esa es la base objetiva inicial que, entre otros elementos, deberá ser examinada en el Grupo de Trabajo de la Sexta Comisión.

Señor Presidente,

Se acepta universalmente que los delitos más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y, en este espíritu, el derecho internacional confirma que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de dichos delitos.

La responsabilidad primaria de llevar adelante investigaciones y juicios corresponde a aquellos Estados en cuyos territorios los delitos han sido cometidos, o bien, a otros Estados que puedan tener una conexión con esos delitos, como puede ser el caso del Estado de la nacionalidad del perpetrador o del Estado de la nacionalidad de las víctimas. Sin embargo, en algunas circunstancias, cuando los Estados no pueden o no desean ejercer su jurisdicción, otros Estados que no tienen una vinculación directa con el delito podrían cubrir ese vacío jurisdiccional sobre la base de la jurisdicción universal. Así, puede decirse que la jurisdicción universal actúa como una herramienta adicional, de carácter excepcional, en el ejercicio de la jurisdicción penal, cuya utilización incide de manera significativa en la disminución de la brecha de impunidad. Esta función de la jurisdicción universal hace de ella uno de los componentes esenciales del sistema de justicia penal internacional. La jurisdicción universal, como veremos, se deriva de normas de derecho internacional, que son las que la habilitan.

Pero también es preciso tener presente que una jurisdicción universal sin limitaciones podría producir conflictos de jurisdicción entre Estados, sujetar a los individuos a abusos procesales o dar lugar a persecuciones judiciales motivadas políticamente.

A fin de poder garantizarse un ejercicio razonable de la jurisdicción universal, la Argentina entiende que deben existir reglas claras que la gobiernen, más aún cuando haya ciertos "mitos" e interpretaciones erróneas alrededor de este concepto.

La Argentina remitió sus comentarios al Secretario General en la 66ª sesión. En esos comentarios, se sugirió que el Grupo de Trabajo de la Sexta Comisión debería abordar, entre otros: el concepto de jurisdicción universal, el status de la jurisdicción universal en el derecho internacional - incluida la práctica legislativa y judicial de los Estados-, y las condiciones bajo las cuales la jurisdicción universal ha de ser ejercida. En la 66ª sesión, todos esos aspectos fueron identificados como elementos del programa futuro del Grupo de Trabajo.

Quisiera reiterar que, por la complejidad del tema, la Argentina es de la opinión de que el examen que emprenda el grupo de trabajo debería hacerse a través de un enfoque "paso a paso", en el que, en una primera etapa del estudio, cabría hacer hincapié en clarificar el

concepto de la jurisdicción universal. En este enfoque "paso a paso", no obstante, mi país no descarta la posibilidad de solicitar que se remita el tema a la Comisión de Derecho Internacional. Posiblemente, pueda solicitarse a la CDI un estudio sobre el tema en paralelo con la consideración en la Sexta Comisión.

Respecto del fondo del concepto, cabe mencionar que la jurisdicción universal suele ser confundida con otras soluciones jurisdiccionales, como las que proponen el principio de complementariedad o el principio *aut dedere aut judicare* y, además, suele ser asociada de manera indisoluble -no siempre con razón-, con otros conceptos, como el de *jus cogens* u *obligatio erga omnes*. Entre todos ellos, nos parece importante en esta instancia marcar las diferencias entre la jurisdicción universal y el principio *aut dedere aut judicare*, dado que estos dos conceptos están siendo considerados actualmente en el ámbito de las Naciones Unidas.

Si bien en algunos casos hay superposición entre estas dos nociones, desde un punto de vista estrictamente teórico, no se trata de nociones idénticas. El objetivo del principio *aut dedere aut judicare* es evitar que los delitos queden impunes cuando no se concede la extradición del sospechoso que se encuentra en el territorio del Estado requerido. El principio *aut dedere aut judicare* no establece *per se* qué bases de jurisdicción deberían ser ejercidas cuando el Estado requerido opta por remitir el caso a sus propias autoridades judiciales. La jurisdicción universal, por el contrario, es una base en sí misma para habilitar el ejercicio de jurisdicción que se basa únicamente en la naturaleza del crimen, indistintamente de dónde hubiera sido cometido dicho crimen, de la nacionalidad de la víctima o del presunto culpable, o de cualquier otro punto de conexión con los intereses nacionales del Estado que ejerce la jurisdicción. Sentado lo que antecede, se acepta que el principio *aut dedere aut judicare* puede superponerse con el de jurisdicción universal cuando un Estado no tiene un punto de conexión con el crimen más que la mera presencia del sospechoso en su territorio y, en aplicación del principio "aut dedere aut judicare", opta por no conceder la extradición y, consecuentemente, el juzgamiento del caso se funda necesariamente en la jurisdicción universal. Se entiende que sólo en este caso hay una superposición de ambos conceptos o, en otras palabras, que es en este caso en que la jurisdicción universal cumple un rol decisivo en la aplicación cabal del principio *aut dedere aut judicare*.

El relevamiento de los tratados internacionales, las legislaciones internas y la práctica judicial en la materia debe hacerse teniendo en cuenta la diferencia señalada entre la jurisdicción universal y el principio *aut dedere aut judicare*, pues de lo contrario se corre el riesgo de extraer conclusiones equivocadas.

La inclusión de la jurisdicción universal propiamente dicha y de manera explícita en el derecho convencional es reducida. Entre los instrumentos multilaterales que la contemplan expresamente, pueden mencionarse: las Convenciones de Ginebra de 1949 (arts. 49, 50, 129, 146, respectivamente) la Convención de La Haya para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado (art. 28), la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (art. 105), y la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid (art. V).

Otros tratados habilitan implícitamente el ejercicio de la jurisdicción universal cuando disponen, por ejemplo, que "[e]l presente Convenio no excluye ninguna jurisdicción penal ejercida de acuerdo con las leyes nacionales". De esta forma, los tratados permiten implícitamente que los Estados establezcan en sus legislaciones internas la jurisdicción universal. Disposiciones de esta clase aparecen, entre otros, en los siguientes tratados multilaterales: el Convenio sobre Infracciones y Ciertos Otros Actos Cometidos a Bordo de las Aeronaves de 1963, el Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves de 1970, el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación civil de 1971, el Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma Continental de 1988, la Convención sobre la Prevención y el

Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, Inclusive los Agentes Diplomáticos de 1973, la Convención internacional contra la toma de rehenes de 1979, la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado de 1994, la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios de 1989, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984, y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas de 2006.

Por su parte, el principio *aut dedere aut judicare* está presente en la mayoría de los tratados multilaterales que versan sobre el combate a delitos transnacionales, como es el caso, por ejemplo, de los trece convenios internacionales contra el terrorismo, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, entre otros.

Cabe precisar que los tratados que permiten de manera implícita la jurisdicción universal - como los mencionados en el párrafo anterior- prevén al mismo tiempo el principio *aut dedere aut judicare*.

Hecha la distinción entre la jurisdicción universal y el principio *aut dedere aut judicare*, hay que tener presente que este último está siendo objeto de análisis por parte de la Comisión de Derecho Internacional. En ese ámbito, también surgió la preocupación por trazar una distinción clara entre ambos conceptos y, aunque se entendía que esos conceptos coexistían en algunos casos, la Comisión decidió centrarse en el principio *aut dedere aut judicare* y no en la jurisdicción universal. De igual manera, se entiende que el estudio sobre la jurisdicción universal que encare el grupo de trabajo creado por la Resolución 65/33 de la Asamblea General debería reconocer y explorar la relación que existe con otros conceptos, pero centrarse en los elementos propios del principio de jurisdicción universal.

Señor Presidente,

Quisiera reiterar la disposición de mi delegación para continuar el examen de este tema y hacer los esfuerzos necesarios para que su consideración avance dentro de los parámetros de análisis propios de la Sexta Comisión.

Muchas gracias”.

Mr. Chairman,

Argentina welcomes the fact that the Sixth Committee once again addresses the scope and application of the principle of universal jurisdiction -included in the Agenda of the General Assembly at its 64th Session-, as it is an institution of public international law that demands legal rigour.

My delegation aligns itself with the intervention on CUBA on behalf of CELAC.

We also recognize the Secretariat for preparing the Report contained in document A/68/113 and its Add.1. Also, we thank the Secretariat for preparing the information documents A/C.6/66/WG.3/INF.1 and INF.2, that contain a compilation of international treaties and decisions of international tribunals relevant for the principle of universal jurisdiction, and which were requested by virtue of paragraph 4 of the Report of the Sixth Committee (A/65/474). That is the initial objective basis that, among other elements, will have to be examined at the Working Group.

Mr. Chairman,

It is universally accepted that the most serious crimes of international concern cannot remain unpunished and, in that spirit, international law confirms that it is the duty of all States to exercise their criminal jurisdiction against the perpetrators.

The primary responsibility in carrying out investigation and prosecution is on the States in which territories the crimes were committed, or on other States having a connection with such crimes, such as the State of nationality of the perpetrator or the State of nationality of the victims. Nevertheless, in certain circumstances, when those States cannot or are unwilling to prosecute, other States not having a direct link with the offence could close such jurisdictional gap on the basis of universal jurisdiction. Therefore, it can be said that universal jurisdiction is an additional tool of an exceptional nature for the exercise of criminal jurisdiction that contributes significantly to closing the impunity gap. This function of universal jurisdiction makes it one of the key components of the international criminal justice system. Universal jurisdiction derives from international law norms, which are the ones that allow its exercise.

But we must also have in mind that a limitless universal jurisdiction could lead to conflicts of jurisdiction between States, to subjecting individuals to procedural abuses or even to politically motivated judicial prosecutions. There is also the risk that an imprudent exercise of universal jurisdiction could create frictions among States, as it could be perceived as a tool for interfering in the internal affairs of other countries or as some kind of hegemonic jurisdiction exercised by some developed States against nationals of developing countries.

Argentina believes that clear rules would ensure a reasonable exercise of universal jurisdiction, in particular taking into account that there are certain "myths" or erroneous interpretations around this principle.

Argentina sent its comments to the Secretary General. In those comments, we suggested that the Working Group of the Sixth Committee should address, among others: the concept of universal jurisdiction, the status of universal jurisdiction in international law -including the legislative and judicial practice of States-, and the conditions under which it is to be exercised.

Due to the complexity of the issue, Argentina is of the view that the examination of the issue at the Working Group should follow a “step by step” approach, in which, as a first step, we should aim at clarifying the concept of universal jurisdiction. In this “step by step” approach, nevertheless, my country does not rule out the possibility of requesting the issue to be sent to the International Law Commission. Possibly, we could request the ILC to undertake a study in parallel with the Sixth Committee’s consideration of the issue.

Regarding the concept, universal jurisdiction is usually confused with other jurisdictional concepts, such as the complementarity principle or the *aut dedere aut judicare* principle; and it is also usually associated –not always correctly– in an indissoluble manner with other concepts, such as *jus cogens* or *obligatio erga omnes*. Among them, it is relevant at this stage to point out the differences between universal jurisdiction and the principle *aut dedere aut judicare*, as they are both being currently examined at the United Nations.

Although in some cases there could be some overlap between these two notions, from a strictly theoretical standpoint, they are not identical notions. The purpose of the principle *aut dedere aut judicare* is to prevent impunity when extradition of the alleged perpetrator is not granted by the required State. The principle *aut dedere aut judicare* does not establish *per se* what basis for jurisdiction should be exercised when the required State opts for prosecution by its own judicial authorities. Opposite to that, universal jurisdiction constitutes in itself a basis for the exercise of jurisdiction, which is grounded only on the nature of the offence, irrespective of where it was committed, of the nationality of the victim or that of the alleged offender, or of any other connection with the national interests of the State exercising jurisdiction. Therefore, it is accepted that the principle *aut dedere aut judicare* can overlap with universal jurisdiction in the case of a State not having any connection with the offence other than the mere presence of the alleged offender in its territory, and which in accordance with the principle *aut dedere aut judicare* opts for not granting extradition, and also decides to prosecute –in which case the basis for jurisdiction cannot be other than the principle of universal jurisdiction–. Only in this case there is an overlap between both concepts, that is to say, this is the case in which universal jurisdiction plays a decisive role in the full application of the *aut dedere aut judicare* principle.

To prevent erroneous conclusions, therefore, the examination of international treaties, internal legislation and judicial practice must take into account this difference between universal jurisdiction and the *aut dedere aut judicare* principle.

The express inclusion of universal jurisdiction in an explicit manner in international conventional law is limited. Among the multilateral treaties providing for universal jurisdiction there are the 1949 Geneva Conventions (articles 49, 50, 129, 146, respectively), the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (art. 28), the United Nations Convention on the Law of the Sea (art. 105), and the International Convention on the Suppression and Punishment of the crime of Apartheid (art. V).

Other treaties implicitly allow for the exercise of universal jurisdiction by providing, for example, that “[t]his Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with national law”. Therefore, treaties implicitly allow States to provide for universal jurisdiction in their national legislation. Provisions of this sort are contained, among others, in the following multilateral treaties: the 1963 Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board of Aircraft, the 1970 Convention on the Unlawful Seizure of Aircraft, the 1971 Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, the 1988 Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms located in the Continental Shelf, the 1973 Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, the 1979 International Convention against the Taking of Hostages, the 1994 Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, the 1989 International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries, the 1984 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, and the 2006 International Convention for the Protection of All Persons

from Enforced Disappearance.

Regarding the *aut dedere aut judicare* principle, it can be found in most multilateral treaties dealing with transnational crime. That is the case of the thirteen international conventions against terrorism, the 1988 United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, the 2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the 2003 United Nations Convention against Corruption, among others.

It must be borne in mind that the treaties implicitly allowing the exercise of universal jurisdiction provide at the same time for the application of the *aut dedere aut judicare* principle.

Having made reference to the distinction between universal jurisdiction and the *aut dedere aut judicare* principle, it is relevant to point out that the latter is the subject of study by the International Law Commission. Also at the International Law Commission, there was the concern about setting a clear distinction between both concepts, and despite recognizing that both coexist in some cases, the ILC decided to focus on the *aut dedere aut judicare* principle, not on universal jurisdiction. Along the same lines, we believe that the examination of universal jurisdiction by the Working Group established pursuant to General Assembly Resolution 65/33, should recognize and explore the relationship with other concepts, but focusing on the elements that are characteristic of universal jurisdiction.

Mr. Chairman,

I would like to reiterate the disposition of my delegation to continue the consideration of this issue and to make every effort for making progress within the parameters for the examination of issues that characterize the work of the Sixth Committee.

Thank you.